



Atribución-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-SA 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:

Atribución-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-SA 2.5)

Para leer el texto completo de la licencia, visita:

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

hacer obras derivadas

hacer un uso comercial de esta obra



Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



Compartir bajo la Misma Licencia — Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.

LA INOPERANCIA JUDICIAL EN LOS CASOS DE VALORACIÓN PROBATORIA FRENTE A LA VIOLENCIA DOMÉSTICA: ESTUDIO DE CASO

Romy Patricia Moncaleano Floriano

Resumen: La violencia de género ha sido y continúa siendo uno de los temas que más afecta los ordenamientos jurídicos, pese a las disímiles normas que existen en pro de proteger las clases menos favorecidas, para el caso, las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Es así, como el presente artículo busca mostrar la forma como los operadores jurídicos hacen caso omiso de las circunstancias que rodean las situaciones de violencia contra las mujeres pasando por alto las normas que amparan sus derechos, generando con ello la inoperancia, en cuanto a la valoración probatoria. Aspecto que lleva a exponer la colisión de los derechos fundamentales presentada, a través de un estudio de caso por medio de la jurisprudencia T – 967 de 2014 y la ponderación de los derechos, debido a que en el caso se evidencia la ilegitimidad del acto de autoridad entre los derechos fundamentales violados como son igualdad, intimidad y debido proceso, aunado al principio de verdad.

Palabras clave: Violencia de género, derechos fundamentales, ponderación, colisión y principio de verdad.

Abstract: Gender violence has been and continues to be one of the issues that most affects legal systems, despite the dissimilar rules that favor favoring the less favored classes, in this case, women victims of intrafamily violence. Thus, as the present article seeks to show how legal operators ignore the circumstances surrounding situations of violence against women by overlooking the norms that protect their rights, thereby generating inoperability, in terms of Probationary assessment Aspect that exposes the collision of the fundamental rights presented, through a case study through the jurisprudence T - 967 of 2014 and the weighting of the rights, because in the case the illegitimacy of the act of Authority between fundamental rights violated - right to equality, privacy and due process - coupled with the principle of truth.

Key words: Gender violence, fundamental rights, weighting, collision and truth principle.

1. Metodología

1.1. Método y técnica de recolección

Para la realización del artículo, en el campo del derecho, se puede hablar de dos tipos de metodología: *una metodología judicial* y *una metodología dogmática doctrinal*. La primera tiene relación con el ejercicio práctico del derecho; en cuyo caso fue a través de la revisión jurisprudencial con relación a la violencia hacia la mujer o violencia de género. Así, la metodología práctica, se ocupó de conocer la forma en que resuelven los jueces u órgano administrativo una controversia jurídica, partiendo de los criterios de argumentación que tiene el juez, en el ejercicio de la interpretación de las normas, según el caso. “Este conocimiento, originado por los jueces en sus sentencias, no forma parte de la dogmática, a no ser que se incorpore a ella por medio de algún autor, de ahí que sea útil diferenciar entre los juristas y los profesionales del derecho” (Sánchez, 2011, pág. 338).

La segunda fue el abordaje de la actividad dogmática propiamente dicha; es decir, lo que se ha escrito sobre el tema. Se tiene que fue la que permitió diferenciar el conocimiento jurídico de otros tipos de conocimientos. La investigación doctrinal cumplió el rol de manual; toda vez, “que las investigaciones doctrinales sostienen que las construcciones dogmáticas tienen que cumplir un fin práctico, esto significa que el conocimiento por el conocimiento no tendría sentido en el derecho, al menos no en este tipo de investigación” (Sánchez, 2011, pág. 338).

Sirvió también para este artículo, *la investigación jurídica social*; así, uno de los fines de este estudio es conocer como viene funcionando el derecho, saber, por ejemplo, si cuando un juez falla un proceso de violencia intrafamiliar una de las formas de violencia hacia la mujer comprende el alcance de las reglas del derecho para estos eventos. En cuyo caso resulta pertinente la estructura de la ponderación como método de investigación que permite identificar el nivel de afectación de los derechos vulnerados a través de la fórmula del peso abstracto y la de seguridad de las apropiaciones empíricas, técnica que consiste en establecer la relación existente entre “las normas y lo que esas normas han ocasionado y ocasionan en la sociedad” (Sánchez, 2011, pág. 347).

Así, la estructura de la ponderación se consolida a partir de los principios en colisión; “razón por la cual es necesario tener en cuenta tres elementos que forman dicha estructura: *La ley de ponderación, la fórmula del peso y las cargas de argumentación*” (Bernal, 1989, pág. 8). Aspectos que se desarrollan al final de este apartado, después de realizado el análisis de la sentencia.

Como complemento de lo anterior, no se puede dejar de lado el estudio de caso que “tiene como particularidad básica abordar de forma intensiva una unidad, ésta puede orientarse a una persona, una familia, un grupo, una organización o una institución” (Stake, 1994, pág. 239). Así, en la presente investigación el estudio de caso que se escogió fue “típico” que hace referencia a una o varias personas que representan una

comunidad que le ofrece a la investigación cierta homogeneidad o coherencia en sus respuestas.

En cuanto a la recolección de la información ésta se realizó a través de un método de análisis documental, el cual permitió una aproximación a los aspectos teóricos con relación al tema objeto de estudio. “Esta técnica está basada en el análisis y depuración de la información que tienen como propósito analizar material impreso, el cual sirve para la elaboración del marco teórico del estudio” (Cerde, 2011, pág. 387). Esta clase de método resulta ser muy significativo, “pues permite entender el fenómeno central de estudio. Prácticamente la mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades, y sociedades los producen y narran, o delinean sus historias y estatutos actuales” (Cerde, 2011, pág. 388).

Esta práctica le sirve al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento cotidiano.

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/co/legalcode>

2. Introducción

A partir de la consolidación de un gran número de derechos fundamentales el discurso teórico y cívico sobre los mismos se transforma. No se trata de abogar por su constitucionalización, aunque se continúa el debate sobre la necesidad de aumentar el número de derechos, cuando lo que se requiere es supervisar la correcta puesta en práctica de los existentes, tales como el derecho a la igualdad, intimidad, debido proceso, entre otros. Y para ello, se requiere de la aplicación de importantes técnicas interpretativas; siendo una de éstas la ponderación. De esta forma, la ponderación se vuelve relevante cuando se comprende que no existen derechos absolutos, sino que cada derecho se enfrenta a la posibilidad de ser limitado.

Muestra de lo anterior, es el tema que ocupa el presente artículo frente al problema que enmarca el choque entre derechos fundamentales y la forma de interpretar las normas, puede observarse claramente en los procesos constitucionales que tutelan los derechos de las personas, donde generalmente se ataca la ilegitimidad de un acto de los poderes públicos que los lesiona. Lo anterior, a partir de las decisiones tomadas frente a un caso de violencia contra la mujer, donde la accionante solicitó el divorcio aportando las pruebas pertinentes, siendo desestimadas en primera instancia por el Juzgado 4to de Familia, decisión confirmada por la respectiva sala del Tribunal Superior de Bogotá y que a través de la acción de tutela se logró establecer la colisión de los derechos fundamentales. Llegando a concluir que el empleo del juicio de ponderación presupone una visión abierta y pluralista que no conoce de jerarquías o absolutismos en el catálogo de bienes, valores y derechos constitucionales. En este sentido, los derechos a tener en cuenta son: el derecho a la igualdad (artículo 13), intimidad (artículo 15) debido proceso (artículo 29), familia (art. 42), igualdad entre hombres y mujeres (art. 43) y el principio de verdad en el contexto de la violencia contra la mujer conforme lo muestra la Corte Constitucional en la sentencia T – 967 de 2014.

En este orden de ideas, la sentencia en análisis evidencia un choque normativo, en el que además de derechos fundamentales lesionados existen otros derechos u otros principios de rango constitucional, plenamente oponibles que articulan más complejamente las determinaciones de los jueces. Así, en la providencia se adujo el *defecto fáctico y violación de la constitución*, siendo el primero comprendido en su dimensión negativa que obedece a “cuando la autoridad judicial no práctica o valora una prueba o la valoración de la misma se hace de forma arbitraria, irracional o caprichosa, lo que en última se traduce en la imposibilidad de comprobar los hechos” (Corte Constitucional Sentencia T - 160, 2013) y el segundo se deriva del principio de la supremacía que reconoce a la constitución como instrumento plenamente vinculante y con fuerza normativa, bajo el entendido del requisito de subsidiaridad que ha sido previsto como un “instrumento de defensa judicial para la protección inmediata de los derechos fundamentales, procedente cuando no existan otros medios de defensa a los que se pueda acudir, o cuando existiendo éstos se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable” (Corte Constitucional Sentencia T - 097, 2014).

Los elementos antes expuestos, constituyen el eje central de la sentencia T – 967 de 2014 objeto de estudio.

Se tiene entonces, que en la jurisprudencia en análisis se evidencia la ilegitimidad del acto de autoridad, entre el derecho constitucional violado y el principio constitucional en que se pretende fundar la actuación denunciada. Así, cabe anotar que la Administración en defensa de la legitimidad del acto, particularmente recuerda al juez la existencia coetánea de otros principios constitucionales donde aparentemente descansa el argumento de su cuestionado proceder. Aspecto que se ve reforzado a través de los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales. En este orden de ideas, las contradicciones se presentan entre pares del derecho constitucional, es decir derecho a *la intimidad, igualdad, y debido proceso*, frente a la *dignidad humana y principio a la verdad* limitando su protección.

Se refleja, la colisión entre estos derechos fundamentales frente a uno de los casos más difíciles de los que se ha ocupado la Corte, la violencia hacia la mujer o violencia de género. De ahí que, “el denominador común de los conflictos de derechos fundamentales consiste en que éstos derechos, perteneciendo al mismo cuerpo constitucional, y, por tanto, teniendo la misma jerarquía, temporalidad y especialidad, no pueden ser resueltos mediante los clásicos criterios de solución de antinomias normativas” (Baquerizo, 2009, pág. 22). Lo que lleva a establecer que, frente a la colisión de derechos fundamentales, no se pueden subsumir los hechos de forma absoluta en una disposición constitucional, ni se pueden aventurar o definir cuál de los derechos contrastados sería jerárquicamente superior, cronológicamente anterior o gradualmente “especial” frente al otro u otros.

La resolución de esta contradicción de derechos debe recurrir, luego, a un criterio orientador diferente de aquellos que tradicionalmente se conoce; tarea ésta que “implica revisar la concepción respecto de la estructura del sistema normativo, que en definitiva no se encuentra solamente compuesto de reglas, sino también y en grado fundamental de principios” (Baquerizo, 2009, pág. 22).

Los aspectos planteados llevan a establecer la finalidad del artículo en los siguientes términos: *¿Siguiendo las reglas de la estructura de la ponderación y conforme al caso evidenciado en la sentencia T – 967 de 2014 de los derechos y principios colisionados cómo se puede determinar el derecho que prevalece?*

Al respecto es importante hacer mención del artículo de Guibourg (2015) titulado *Alexy y su fórmula del peso*, a través del cual se plantea el examen de algunas publicaciones de Alexy, mediante las que se genera una crítica que busca probar que todas las “afirmaciones de Alexy se hallan vinculadas, pero todas ellas dependen, en última instancia de dos premisas: la pretensión de la corrección como una condición necesaria del derecho y la fórmula del peso como demostración de que es posible aplicar racionalmente los principios” (pág. 1).

Se tiene entonces, que la fórmula del peso de Alexy se presenta como un gran “ejemplo de argumento racional. La ponderación está conectada con el discurso y es imposible sin él. De tal modo, la ponderación es tan racional como el discurso mismo: si el discurso práctico no es racional, no hay racionalidad práctica absoluta” (Guibourg, 2015, pág. 4).

De ahí que, los elementos a *pesar* en la ponderación son los principios. De acuerdo con Alexy, “los principios son mandatos de optimización es la clave de bóveda de la racionalidad” (Guibourg, 2015, pág. 4). Razón por la cual, el discurso racional se determina por el uso de los buenos argumentos, que permiten que las soluciones jurídicas se logren a través de la ponderación y no por la simple argumentación moral.

Por su parte, Bernal (2008) escribió sobre *la racionalidad de la ponderación*, “objeto de variadas discusiones teóricas y prácticas. Uno de los problemas más emblemáticos es si la ponderación es un procedimiento racional para la aplicación de normas jurídicas o un mero subterfugio retórico útil para justificar toda clase de decisiones judiciales” (pág. 44). En cuyo caso, se debe dejar claridad que la ponderación es una estructura a través de la cual no debe establecerse una relación absoluta, sino una relación de precedencia condicionada entre los principios, conforme las circunstancias del caso, con el fin de determinar el sentido de la decisión judicial.

En este sentido, es importante hacer mención de lo expuesto por Alexy (1997) sobre la interpretación jurídica como la tarea “psíquica de descubrimiento del significado de la norma y la labor argumentativa de justificación. La primera se refiere al proceso de reconstrucción sintáctica y determinación semántica del significado de la norma y la segunda a la interpretación que determina el significado del enunciado normativo” (pág. 213).

Los aspectos hasta ahora señalados permiten identificar la importancia de la estructura de la ponderación como una forma efectiva de esclarecer la colisión entre derechos en pro de determinar el grado de incidencia de éstos con relación a los principios que se estén analizando.

Lo enunciado, permite plantear la siguiente hipótesis de trabajo que se aborda a partir de la colisión entre el derecho fundamental y el principio; es decir, entre el derecho a la intimidad y el principio a la verdad, siendo los que, en la jurisprudencia T – 967 de 2014, han generado el choque del derecho fundamental y el principio materia propia de la ponderación y ello por la sustancial consideración que un conflicto de esta naturaleza no se armoniza del clásico triunfo permanente de una norma sobre la otra, sino que exige, la victoria circunstancial del derecho y principio contrapuestos, siempre y cuando se hagan a partir del análisis de las particularidades del caso en estudio. En tal sentido, se busca demostrar en el desarrollo del presente artículo que el principio a la verdad, supera todos los derechos fundamentales enunciados.

Se debe abordar lo concerniente a la violencia contra la mujer o la violencia de género contemplada en la Ley 1257 de 2008, como *cualquier acción u omisión, que le cause*

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado.

Es importante resaltar que a partir de la promulgación de esta ley se crea la necesidad de analizar más profundamente todo lo concerniente a “la violencia contra las mujeres ha recibido una atención creciente en el ámbito internacional con ocasión a sus implicaciones en la salud pública así como en el ejercicio de los derechos humanos” (Lafaurie, 2013, pág. 99). También es fundamental señalar que este flagelo es una realidad que se presenta en todos los niveles sociales y más cuando “se dan condiciones sociales que incrementan la vulnerabilidad de este núcleo como son la pobreza, las migraciones, las problemáticas de origen étnico y racial y los conflictos armados además de unas relaciones de género inequitativas y desiguales” (Lafaurie, 2013, pág. 101).

En términos de la jurisprudencia la violencia contra la mujer:

Es un fenómeno que suele estar relacionado con diversas causas sociales, culturales, económicas, religiosas, étnicas, históricas y políticas, que opera en conjunto o aisladamente en desmedro de la dignidad humana, y que afecta los derechos de un número gravemente significativo de seres humanos. Así, se ha identificado que la violencia contra la mujer es “una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que conduce a perpetuar la discriminación contra ésta y a obstaculizar su pleno desarrollo (Corte Constitucional sentencia T - 967, 2014).

En este sentido, el Estado tiene obligaciones ineludibles en torno a la eliminación de cualquier tipo de discriminación o violencia ejercida contra una persona por razón de su sexo. Aspecto que en la sentencia en estudio no se da, dejando en vilo lo dispuesto por la Corte Constitucional y la Ley 1257 de 2008, sumado a ello las mujeres hoy en día son víctimas de diferentes violencias en su vida diaria, pero uno de los casos más comunes es el que se vive en el interior de sus hogares. Violencia que en muchas circunstancias continúa siendo invisibilizada.

Fundamentos que se fortalecen a partir del siguiente objetivo general que tiene como fin *exponer la colisión de los derechos fundamentales presentada en la jurisprudencia T – 967 de 2014, de cara al juicio de ponderación*, el cual se aborda en los siguientes objetivos específicos: *Revisar la violencia de género a la luz de la jurisprudencia; determinar el problema de la colisión del derecho a la intimidad y el principio a la verdad de cara a la ponderación; y analizar las cargas argumentativas frente al problema concreto.*

Ante los objetivos planteados, es necesario establecer que el derecho a la intimidad en virtud del artículo 15 está consagrado en la Constitución de 1991 como uno de los derechos fundamentales de la persona, y de la familia. No pasaba igual bajo la vigencia de la Constitución Nacional de 1886, que no mencionaba la palabra intimidad y mucho menos, un derecho que la protegiera, aunque la jurisprudencia tanto de la “Corte

Suprema como del Consejo de Estado, con alguna frecuencia, desarrolló un derecho a la intimidad, basado en aspectos tales como la inviolabilidad de domicilio y correspondencia; que, en todo caso, podían ser limitados en circunstancias de perturbación del orden público” (Giraldo, 2012, pág. 1).

En cuanto, a los principios de los que se vale el ordenamiento jurídico se debe hacer alusión que estos tienen como fin “interpretar, fundamentar e integrar la juridicidad vigente, con el objeto de resolver las cuestiones dentro del contexto del orden jurídico” (Mabel, 2012, pág. 1). Así, el principio y alcance de la verdad material, busca establecer “la realidad y sus circunstancias, con independencia de cómo han sido alegadas y probadas, supone que se deseche la prevalencia de criterios que acepten como verdadero algo que no lo es o que nieguen la veracidad de lo que si lo es” (Giraldo, 2012, pág. 3).

En el marco de las apreciaciones anteriores, la ponderación viene hacer “la técnica argumentativa generalmente utilizada para decidir judicialmente un caso que parece simultáneamente subsumible bajo dos o más normas en conflicto, y en el que falta un criterio de coordinación formalmente prescrito o convencionalmente aceptado por los operadores jurídicos” (Pino, 2013, pág. 133). De esta forma, la ponderación se ha convertido en una regla metodológica indispensable para el ejercicio de la función jurisdiccional, especialmente la que se desarrolla en los Tribunales Constitucionales, que se encargan de la aplicación de normas que, como los derechos fundamentales, tienen la estructura de principios. Así, que la ponderación se ubica en el centro de muchas discusiones teóricas, que revelan algunos aspectos tales como su estructura y sus límites.

Los planteamientos antes señalados, constituyen la base teórica para el desarrollo del presente artículo, que se estructura, a partir de una *metodología judicial* y una *metodología dogmática doctrinal*. La primera tiene relación con el ejercicio práctico del derecho a través de la revisión jurisprudencial frente a la violencia hacia la mujer o violencia de género y la segunda el abordaje de la actividad dogmática propiamente dicha; es decir, lo que se ha escrito sobre el tema. Sirvió también a los fines del artículo propuesto, *la investigación jurídica social* acompañada de un estudio de caso, cuya técnica es documental que permite la consulta y depuración de los documentos requeridos.

3. La violencia de género en el marco de la jurisprudencia colombiana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La violencia en contra de las mujeres viene de tiempos pasados y esto se presenta como un problema de índole social por lo que es considerada desde los noventa como delito a nivel mundial; en donde, “los esfuerzos emprendidos por las organizaciones de mujeres, los y las expertas y algunos gobiernos comprometidos con esta cuestión han supuesto una profunda transformación de la sensibilización pública respecto al problema” (Gómez, 2013, pág. 14). En este sentido, la violencia contra la mujer encierra una serie de modalidades como:

- **Violencia verbal o psicológica:** Esta clase de violencia está “relacionada a toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica” (Profamilia, 2015, pág. 2). El cual es reflejo de muchas sociedades; en donde la mujer es vilipendiada por el simple hecho de ser mujer, siendo vulnerada por sus actuaciones; generando con ello, inseguridades y poca autoestima, a lo que se suma que es uno de los delitos menos denunciados en la justicia colombiana.
- **Violencia Física:** Esta “consiste en agredir el cuerpo de una persona, ya sea a través de golpes, lanzamiento de objetos, encierro, sacudidas o estrujones, entre otras conductas que pueden ocasionar daños físicos” (Profamilia, 2015, pág. 2). A diferencia de la violencia verbal o psicológica, está con el tiempo ha sido más denunciada; pero, lamentablemente continúa siendo una de las problemáticas sociales más complejas del país.
- **Violencia Sexual:** Es todo “acto sexual (físico o verbal) no deseado ni aceptado por la otra persona sea hombre o mujer, es decir, que se utilizaba la fuerza y la coacción física, psicológica o cualquier otro mecanismo que anula o limita la voluntad personal” (Profamilia, 2015, pág. 2). Esta es la violencia que más ha degradado a la sociedad colombiana, debido a que junto con las dos anteriores ha sido una constante en el marco del conflicto armado y en todos los niveles de la sociedad. Es decir, la violencia hacia la mujer no tiene distinción de clase ni edad.

Violencia intrafamiliar: “La violencia doméstica o intrafamiliar es aquella que se propicia por el daño físico, emocional, sexual, psicológico o económico que se causa entre los miembros de la familia y al interior de la unidad doméstica. Esta se puede dar por acción u omisión de cualquier miembro de la familia” (Corte Constitucional Sentencia T - 097, 2014). Rodea a todos los que conforman el núcleo familiar, como “hijos ancianos/as, mujeres, hombres, personas con discapacidad o con una identidad de género u

orientación sexual diversa, el cual consiste en una acción u omisión que busca degradar, humillar, maltratar o menospreciar a los miembros que integran el grupo familiar” (Profamilia, 2015, pág. 2). Esta modalidad de violencia es la más común y permitida por la sociedad colombiana; gracias a los conceptos machistas existentes, que convalidan toda clase de atropellos hacia la mujer y que constituye el centro de la presente investigación. Se encuentra contemplada como delito en el artículo 229 del código penal, que señala: El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar, incurrirá siempre, que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. Aumentando la pena cuando la conducta recaiga sobre un menor, una mujer, una persona mayor de 65 años o que se encuentre en estado de indefensión.

- **Violencia de género:** Corresponde a todos “aquellos actos violentos contra las mujeres relacionados con el control que los hombres quieren tener sobre ellas, aprovechándose, en la mayoría de los casos, de las condiciones indefensas, desigualdad y poder” (Profamilia, 2015, pág. 2). Como su nombre lo indica constituye la diferencia que existe entre hombres y mujeres con relación a la violencia.

Asimismo hay que mirar diferentes factores que influyen en esta clase de maltrato como lo son el nivel educativo, las comodidades económicas “del hogar y el estar legalmente casada (factores que aumentan la independencia y el estatus de la mujer en la relación) están asociados con una menor probabilidad de que una mujer experimente violencia psicológica de pareja en su contra” (Rueda, 2011, pág. 166). Aunque los factores resultan determinantes se ha estimado que la violencia hacia la mujer, como ya se expresó no tiene condición social ni edad; ésta hace presencia en toda la sociedad vulnerando los derechos fundamentales de la mujer, especialmente, el derecho a tener una vida digna.

Es importante a partir de lo anterior dejar claro que la violencia contra la mujer al interior del hogar también presenta diversas formas de expresión por medio “de golpes e incidentes graves, como también de insultos, manejo económico, amenazas, chantajes, control de actividades, abuso sexual, aislamiento de familiares y amistades, prohibición de trabajar fuera de la casa, abandono físico o afectivo, humillaciones, o no respetar las opiniones” (Ninco, 2007, pág. 58). Desde este punto de vista se podría afirmar que la violencia intrafamiliar incluye todas las demás modalidades de violencia hacia la mujer – psicológica, física, sexual –; en este caso, se podría afirmar que es la más aberrante de las modalidades de violencia, porque dentro de la sociedad tiene un sesgo de aceptabilidad.

De ahí que, la violencia contra la mujer en Colombia ha sido una constante, que desde los años “1990 el 18,8 % de las mujeres colombianas declaró que su esposo o compañero había ejercido violencia física sobre ellas. Para el 2010 se percibe un aumento de 18 puntos porcentuales, al llegar al 37 %” (Gómez, 2013, pág. 14). De ahí que, para el 2016 “el 86.66% de violencia intrafamiliar es contra la mujer, el 47.27% el

presunto agresor en su compañero permanente y el 29.33% su excompañero sentimental” (El Tiempo, 2016, pág. 1).

Significa que la violencia intrafamiliar es uno de los problemas sociales de mayores dimensiones que enfrenta Colombia, que a su vez es un delito contra la familia y que constituye una de las violaciones más comunes a los Derechos Humanos, “que afecta a la familia, núcleo fundamental de la sociedad, primer espacio de socialización, que debe brindar las condiciones necesarias para el desarrollo de sus miembros con calidad de vida y el afecto necesario para generar la confianza en sí mismo y en los demás” (Vásquez, 2008, pág. 31).

Por lo anterior se puede ver qué aunque existe una normativa vigente en contra de la violencia intrafamiliar este flagelo continua y estas normas no bastan para poder controlar tanta injusticia en contra de las mujeres; cómo se puede observar en un informe de la revista Semana del 2016 el cual indica que “las mujeres siguen siendo las más afectadas por violencia intrafamiliar, con más de 25.000 víctimas” (Semana, 2016, pág. 1).

Como complementó de lo anterior, se encuentran los datos estadísticos ofrecidos por medicina legal que indican que entre los meses de “enero a octubre de los años 2016 y 2017 se realizaron 1.489 necropsias médico-legales a mujeres cuya manera de muerte fue el homicidio” (Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2017, pág. 1), a lo que se suma la violencia intrafamiliar que durante el periodo en análisis se realizaron “27.157 valoraciones, las cuales corresponden a 13.422 en el 2016 y 13.735 en el 2017” (Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2017, pág. 1). En este orden de ideas, los tres departamentos con mayor número de casos para el año 2017 fueron: Bogotá, Antioquia y Cundinamarca.

Contexto sobre el que recae la jurisprudencia en análisis, cuando la denunciante expresa que la situación de violencia fue continua, sistemática y que superó los 5 años, siendo “reportadas en la Fiscalía 117 de la Unidad de Armonía Familiar el 14 de julio de 2010, entidad que inició una investigación por violencia intrafamiliar” (Corte Constitucional sentencia T - 967, 2014).

Que dentro de las actuaciones llevadas a cabo por la Fiscalía 117, se practicó una entrevista psiquiátrica a ambos cónyuges, en la cual se lee: “desde el punto de vista forense, lo dicho hasta aquí hace necesario que se llame la atención sobre un factor de riesgo inherente a estas dinámicas de violencia contra la mujer en estos casos, y que está dado por las posibilidades de atenuación de las agresiones a la misma, una vez ella toma la decisión de separarse, por lo que se requiere se asuman medidas de protección a la mujer y a sus hijos una vez ocurrida la -separación (Corte Constitucional sentencia T - 967, 2014)

Como se puede observar en el caso en estudio la violencia doméstica fue claramente identificada, sugiriéndose la protección hacia la mujer y sus hijos, protección que no fue tenida en cuenta dentro de la actuación procesal. Situación que lleva a repasar el marco

normativo que sobre la violencia hacia la mujer se ha erigido y que fue claramente identificado en la sentencia en estudio.

En el ámbito internacional se tiene:

- 1995 Beijing. Conferencia Mundial de la Mujer: las representantes de 189 gobiernos adoptaron la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing encaminada a eliminar los obstáculos a la participación de la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada. Esta conferencia define un conjunto de objetivos estratégicos y explica las medidas que los gobiernos, la comunidad internacional, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado deben adoptar a más tardar para el año 2000, con el fin de eliminar los obstáculos que entorpecen el adelanto de la mujer.
- 1996 “Convención de Belem do Pará”. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; ratificada por Colombia mediante la Ley 248 de 1997.
- 1999. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General en su resolución A/54/4 de 6 de octubre de 1999; y aprobado por Colombia mediante la Ley 984 de 2005.
- Comisión 2012. La sesión 56 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en Nueva York. Tema de Revisión: La financiación en favor de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer. Tema prioritario: La participación de las mujeres y los hombres jóvenes, y las niñas y los niños, para promover la igualdad entre los géneros.
- 1995-2001. Comisión Económica para América Latina. Surge un nuevo Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, el cual es adoptado por la Sexta Conferencia Regional con el objetivo de “acelerar el logro de la igualdad de género y la total integración de las mujeres en el proceso de desarrollo, así como el ejercicio pleno de la ciudadanía.
- 1997. Comité de Equidad de Género de ACI-Américas. La instancia organizativa de las mujeres en la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas (ACI-Américas), cuya labor es promover la equidad de género en las organizaciones cooperativas en el continente americano en concordancia con los planteamientos del Comité Mundial de Equidad de Género de la ACI.
- 2000. Objetivos del Desarrollo del Milenio. 189 países de Naciones Unidas acuerdan priorizar el promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer (objetivo 3).

Referentes normativos internacionales que reconocen los derechos civiles y políticos de las mujeres:

- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del 18 de diciembre de 1979 (Asamblea General Organización de las Naciones Unidas). “CEDAW” Aprobada Ley 51 de 1981 y entrada en vigor el 19 de febrero de 1982.
- Declaración y Programa de Acción de Viena del 25 de junio de 1993 (Organización de las Naciones Unidas).
- Convención Interamericana “Convención de Belém do Pará” del 9 de junio de 1994 (Organización de los Estados Americanos). Se vincula a la legislación colombiana Mediante la Ley 248 del 29 de diciembre 1995.
- Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer del 4-15 septiembre de 1995 /Beijing (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas).
- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional del 17 de julio de 1998 (Corte Penal Internacional). Vinculado a la legislación colombiana mediante la Ley 742 de 2002.
- Resolución 1325 del 31 de octubre de 2000 (Consejo de Seguridad Naciones Unidas).

Normatividad internacional DDHH de las mujeres:

- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del 18 de diciembre de 1979 (Asamblea General Organización de la Naciones Unidas). “CEDAW” Aprobada Ley 51 de 1981 y entrada en vigor el 19 de febrero de 1982.
- Convención Interamericana “Convención de Belém do Pará” del 9 de junio de 1994 (Organización de los Estados Americanos). Se vincula a la legislación colombiana Mediante la Ley 248 del 29 de diciembre 1995.
- Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer del 4-15 septiembre de 1995 /Beijing (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas).
- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional del 17 de julio de 1998 (Corte Penal Internacional). Vinculado a la legislación colombiana mediante la Ley 742 de 2002.
- Resolución 1325 del 31 de octubre de 2000 (Consejo de Seguridad Naciones Unidas).

En el ámbito nacional:

- Constitución Política de Colombia 1991: Incorpora derechos estratégicos para las mujeres como la participación ciudadana, la libertad, la igualdad frente a los hombres, el

derecho a conformar una familia, la protección durante el embarazo, el derecho a ejercer una profesión, entre otros.

- Ley 1257 del 4 de diciembre de 2008: Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Se adoptaron normas que permiten garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencias, tanto en el ámbito público como en el privado.

- Ley 1232 del 17 de julio de 2008: Por la cual se modifica la Ley 82 de 1993, Ley Mujer Cabeza de Familia y se dictan otras disposiciones. Define la jefatura Femenina de Hogar, como una categoría social de los hogares, derivada de los cambios sociodemográficos, económicos, culturales y de las relaciones de género que se han producido en la estructura familiar, en las subjetividades, representaciones e identidades de las mujeres que redefinen su posición y condición en los procesos de reproducción y producción social.

- Ley 1413 de 11 de noviembre de 2010: Por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas.

- Ley 1450 del 16 de junio de 2011: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. Artículo 177 adopción política pública nacional de Equidad de Género para “garantizar los derechos humanos integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad de género, teniendo en cuenta las particularidades que afectan a los grupos de población urbana y rural, afrocolombiana, indígena, campesina y ROM” y señaló el desarrollo de planes específicos que garanticen los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Tanto en el plano nacional como internacional, los ordenamientos jurídicos han dispuesto normas tendientes a la protección de los derechos de la mujer en el ámbito público y privado. “Los instrumentos internacionales, acogidos por la legislación interna en algunos casos, han adoptado medidas legales que, por una parte, fijan obligaciones concretas tanto a privados como a agentes estatales al tiempo que, por otra, desarrollan las normas no estatales” (Corte Constitucional Sentencia T - 012, 2016).

En el desarrollo normativo para la protección de las mujeres en Colombia no ha sido ajeno a la normativa internacional. El legislador y los jueces han esbozado un marco normativo que debe ser utilizado por los operadores jurídicos al solucionar controversias, cuando en estas se involucren situaciones de violencia o discriminación contra la mujer. “Es decir, las normas tradicionales del derecho no pueden, ni deben, con base en los estándares nacionales internacionales, leerse sin enfoques de género que adecuen la

justicia en escenarios tradicionalmente discriminatorios” (Corte Constitucional Sentencia T - 012, 2016).

En este ámbito señala la sentencia T – 967 de 2014 resumió los estándares legales de protección de la mujer en Colombia, haciendo alusión que el legislador en 1996 expidió la Ley 294 de 1996 por medio de la cual se desarrolla el artículo 42 constitucional que busca prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. En esta norma, entonces se consagraron las directrices y principios que toda autoridad debe acatar cuando se solucione casos de violencia intrafamiliar. Entre ellos se destacan:

- La primacía de los derechos fundamentales y el reconocimiento de la familia como institución básica de la sociedad;
- Que toda forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y, por lo tanto, será prevenida, corregida y sancionada por las autoridades;
- La igualdad de derechos y oportunidades del hombre y la mujer entre otros.

Normativa que se afianza con la Ley 1257 de 2008 ya mencionada, la cual aporta un componente integral que interviene no solamente en asuntos de la esfera privada de los individuos, sino también impone al Estado una serie de obligaciones que debe cumplir. Sin embargo, dentro del ejercicio de la protección de los derechos de las mujeres, en la escena judicial se presentan diversos escenarios, tanto en espacios públicos como privados. Cuando esto ocurre las mujeres acuden a las autoridades, como los jueces, para exigir sus derechos. Lamentablemente, lo que la práctica señala es que cuando esto pasa, se da un fenómeno de *revictimización* de la mujer pues la respuesta estatal no solo no es lo que se esperaba, sino que, muchas veces, se nutre de estigmas sociales que incentivan la discriminación y violencia contra esta población.

Tales circunstancias se presentan, al menos, de dos formas. La primera por la “*naturalización*” de la violencia contra la mujer, obviando la aplicación de enfoques de género en la lectura y solución de los casos y, la segunda, por la reproducción de estereotipos. La administración de justicia no es ajena a estos fenómenos. “Los jueces, además de reconocer derechos, también pueden confirmar patrones de desigualdad y discriminación. Para evitarlo la doctrina internacional y constitucional ha desarrollado una serie de criterios y medidas basadas en el respeto y la diferencia de la mujer” (Corte Constitucional Sentencia T - 012, 2016), aspecto evidenciado en la jurisprudencia en estudio.

Significa que cuando los agredidos son personas consideradas como sujetos de especial protección constitucional, como ocurre con las mujeres, se agrava la responsabilidad que le asiste a los agresores, en virtud del deber específico de amparo que tienen la familia, la sociedad y el Estado frente a dicha población¹.

¹ Véase Sentencia T – 434 de 2014, T – 878 de 2014, T – 027 de 2017, T – 145 de 2017

Situación que no ha escapado a los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – Corte IDH – que en el caso *González y Otras vs México* (2009). La demanda se relaciona con la supuesta responsabilidad internacional del Estado por la “desaparición y ulterior muerte de dos jóvenes, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonnero en la ciudad de Juárez el día 6 de noviembre de 2001” (Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2009).

Al respecto la Corte IDH ha establecido sobre la violencia intrafamiliar que ésta está influenciada por una cultura de discriminación contra la mujer basada en una concepción errónea de su inferioridad, herencia de una cultura patriarcal, en donde los hombres eran los únicos que gozaban de derechos y eran tenidos en cuenta en todos los ámbitos de la vida, mientras que la mujer era tenida en cuenta solamente al servicio del hombre, quien podía hacer “uso” de ella a su entera disposición. Aspecto que ha sido identificado por Amnistía internacional como una característica; en donde, se demuestra que “el género de la víctima parece haber sido un factor significativo del crimen, influyendo tanto en el motivo y el contexto como en la forma de violencia a la que las mujeres son sometidas” (Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2009). Afirma la Corte IDH que la violencia de género incluyendo los asesinatos, secuestros, desapariciones y las situaciones de violencia doméstica e intrafamiliar no se trata de casos “aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades y que estas situaciones están fundadas en una cultura de violencia y discriminación basada en el género” (Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2009).

Un claro ejemplo de lo antes afirmado es la violencia intrafamiliar que sufren las mujeres en Colombia, la cual como ya se expuso tiene un sesgo de aceptabilidad dentro de la sociedad colombiana, haciendo más difícil que las mujeres denuncien y cuando lo hacen existen por parte de la administración una vaga tasación de los daños sufridos por la mujer, llevando a que los fallos no valoren en forma correcta las violaciones perpetradas hacia ellas; tal como sucedió en la sentencia en estudio. De esta forma, es importante establecer que, para tal fin, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho énfasis de la ponderación.

En este sentido, una forma de estimar dicha violencia es haciendo uso de la ponderación, método que permite valorar las circunstancias que encierran un hecho; así, por medio de la ponderación se puede analizar “i) el grado de afectación de los bienes en juego, determinando si la intensidad de dicha afectación fue grave, intermedia o moderada; ii) la importancia de la satisfacción del bien contrarios y iii) si la satisfacción de éste justifica la restricción del otro” (Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2012a). De modo tal que frente al caso presentado en el 2001 con relación a las violaciones de los derechos humanos que habían ocurrido como consecuencia de la prohibición general de la práctica de la fecundación *in vitro*, que en Costa Rica había sido aprobada desde el año 2000, se da el espacio para ponderar los derechos de los intervinientes frente al Estado costarricense. Es por ello, que la ponderación constituye la forma de analizar:

i) Severidad de la inferencia ocurrida en los derechos a la vida familiar y demás derechos involucrados. Asimismo, esta severidad es analizada desde el impacto desproporcionado relacionado con: ii) la discapacidad, iii) el género y iv) la situación socioeconómica. Y finalmente se evaluará v) la controversia sobre la alegada pérdida embrionaria (Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2009).

Se tiene entonces, que la ponderación permitió en el caso contra Costa Rica, demostrar la vulneración de los derechos conexos a la protección absoluta del embrión, al no tener en cuenta otros derechos en conflictos, implicó la arbitraria y excesiva intervención en la vida privada y familiar de los demandantes; y además contribuyó ostensiblemente para tener en cuenta las reglas de la ponderación para equiparar el daño causado a la víctima, ayudando de esta forma a solucionar el litigio. Es por ello, que la regla de la ponderación es de vital importancia a la hora de tasar los daños perpetrados hacia la mujer; en donde, el juez debe tener en cuenta sus reglas para sancionar juicios más objetivos.

En el caso, Atala Rifo y niñas Vs. Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2012b) se hace referencia a la alegada responsabilidad internacional del Estado por el trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar que habría sufrido la señora Atala debido a su orientación sexual en el proceso judicial que resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus hijas. “El caso también se relaciona con la alegada inobservancia del interés superior de las niñas cuya custodia y cuidado fueron determinados en incumplimiento de sus derechos y sobre la base de supuestos prejuicios discriminatorios” (Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2012b). En el caso en comentó, el Estado señaló que en “relación a la adecuación que deben tener las medidas de los Estados para que no sean discriminatorias, basta para satisfacer el test de ponderación (Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2012b), que permite dilucidar el accionar de jueces y demás partes del proceso en cuanto al equilibrio procesal.

A manera de cierre se tiene que, a pesar de existir una amplia legislación nacional e internacional sobre la eliminación de cualquier forma de discriminación contra la mujer, se encuentra que el desarrollo de estas normas no ha sido tomado con la rigurosidad que se requiere, por lo que se hace necesario sancionar normas con un piso que ofrezca las garantías y seguridad que no dejen vacíos que sean utilizados de forma contradictoria o que no sean tenidos en cuenta. Razón por la cual, se deben comprender las causas estructurales de la violencia contra la mujer, cuyo desafío es la paridad: *la igualdad es el derecho y la equidad el mecanismo*. Para ello, se hace necesario contar con una rigurosidad en el seguimiento de estos casos que permita contar con los elementos de protección, no solamente en materia normativa sino estructural.

4. El caso: Sentencia T – 967 de 2014 – Demanda de divorcio – Juzgado 4° de Familia

El 3 de septiembre de 2013, la señora Diana Eugenia Roa Vargas promovió acción de tutela contra el Juzgado 4° de Familia de Bogotá, al considerar vulnerados sus derechos al debido proceso, a la igualdad, a la intimidad, a la libertad de movimiento y a la protección de la familia, a raíz de la sentencia proferida por ese Juzgado en el proceso de divorcio iniciado por ella contra su cónyuge.

El fallo acusado incurrió en *defecto fáctico* por indebida valoración probatoria y en *violación directa de la Constitución*. Explicó que el Juez tenía suficientes elementos probatorios, como testimonios y peritajes, que le permitían inferir la configuración de la causal 3ª de divorcio del artículo 154 del Código Civil, referente a los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. Sostuvo que, con lo anterior, también se vulneró directamente la Constitución, pues ésta consagra la protección de la familia y de la integridad de la mujer en igualdad de condiciones.

Por ende, solicitó se dejara sin efectos la sentencia que negó la pretensión de divorcio y se le ordenara al Juzgado acusado emitir una nueva, con fundamento en los parámetros constitucionales pertinentes (Corte Constitucional Sentencia T - 097, 2014).

Las actuaciones ejercidas por la accionante, en el ejercicio del derecho que tiene a una vida digna para ella y sus hijas, la llevó a solicitar el divorcio previa demostración de los maltratos físico y psicológicos ejercidos por su pareja, los cuales fueron desestimados por la Jueza 4ª de Familia. Existió en la sentencia la vulneración al debido proceso, igualdad, intimidad, libertad de movimiento, protección a la familia. Derechos todos que buscan la protección de las personas. Lo anterior teniendo en cuenta que “los derechos fundamentales como derechos subjetivos equivalen a derechos correlativos donde la libertad de acción presupone el respeto del derecho en cuestión como obligación jurídica para todos y cada uno de los destinatarios de las normas de derechos fundamentales” (Agudelo, 2012, pág. 147).

Como se puede apreciar en la figura 1 la desestimación realizada por parte del Juzgado 4° de Familia, no tuvo en cuenta el acervo probatorio presentado por la demandante, a pesar de expresar que tal fallo se hizo bajo los preceptos de la *sana crítica*, que significa que las pruebas deben valorarse teniendo en cuenta las leyes de la experiencia, la lógica y la psicología, aspectos que no se aplicaron en el fallo.

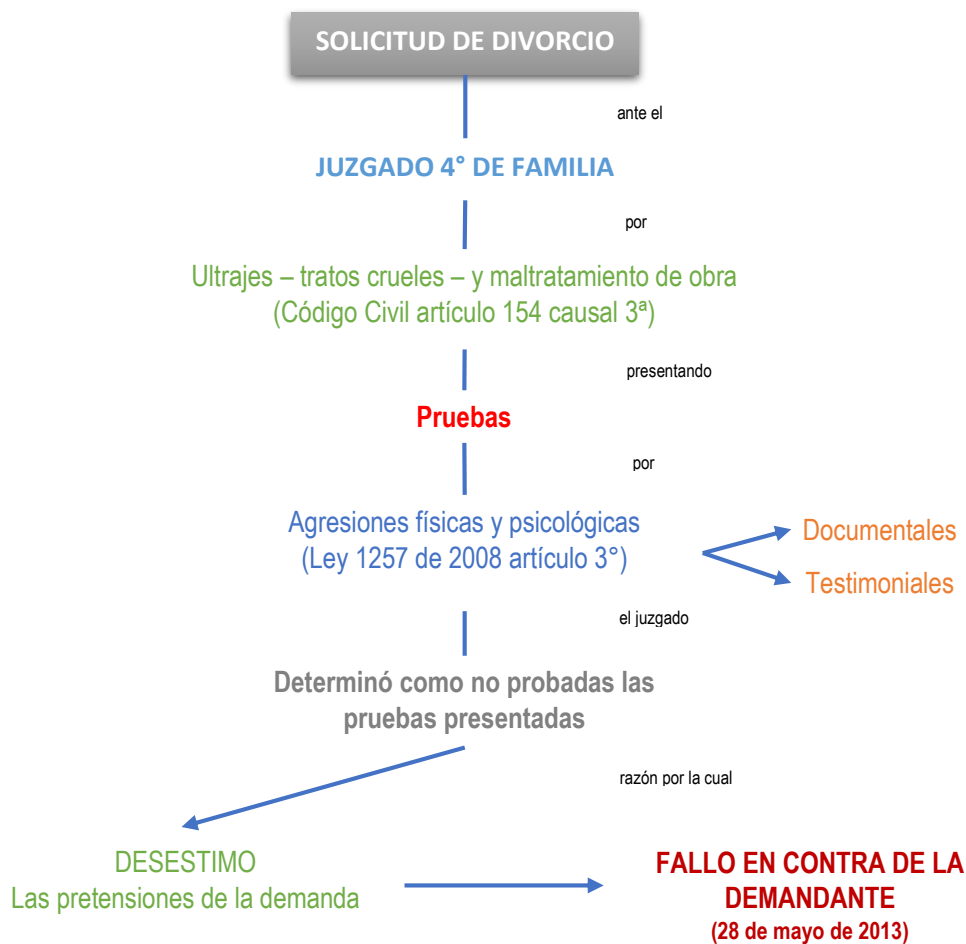


Figura 1. Una visión gráfica del asunto

Fuente: elaboración propia con apoyo de la jurisprudencia T – 967 de 2014.

Con la realización de la tabla 1 se propuso la identificación de unos tópicos que se consideran apuntan a la violación de los derechos a que dio lugar el fallo del Juzgado 4° de Familia, los cuales fueron *discriminación – dignidad – defensa*, que permitieron fundamentar la violación enmarcada en la violencia de género. A lo expuesto se suma, que el fallo incurrió, además en: *defecto fáctico por indebida valoración probatoria y violación directa a la constitución*.

DERECHOS VULNERADOS POR EL JUZGADO 4° DE FAMILIA					VIOLENCIA DE GÉNERO
Derechos Fundamentales		CONCEPTO	TOPICO		
Derecho	Art. Const.				
Igualdad	13	<p>Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y <u>gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.</u> El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. <u>El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.</u></p>	<p>DISCRIMINACIÓN: “La igualdad de género está en el centro mismo de los derechos humanos y los valores de las Naciones Unidas” (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2017, pág. 1). Lo anterior, conforme lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) que en el artículo 7° señala que <i>todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.</i></p> <p>Para garantizar de manera eficaz los derechos humanos de las “mujeres es preciso, en primer lugar, una comprensión exhaustiva de las estructuras sociales y las relaciones de poder que condicionan no sólo las leyes y las políticas, sino también la economía, la dinámica social y la vida familiar y comunitaria” (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1948, pág. 1).</p> <p>Como se puede observar el proceso de divorcio entraba una relación de poder; en donde, el <i>juez</i> tiene la potestad de emitir un fallo, conforme a la percepción, análisis y valoración de las pruebas que le permitan una postura frente al caso en discusión, haciendo énfasis que en el presente caso el</p>		

			derecho a la igualdad no se tuvo en cuenta.	
Intimidad	15	<p>... Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar...</p>	<p>DIGNIDAD: “En el amplio contexto de la subordinación de la mujer, los factores concretos que causan la violencia son el uso de la fuerza para resolver conflictos, <u>las doctrinas sobre la intimidad</u> y la inercia de los Estados” (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2006, pág. 4).</p> <p>Así, en la doctrina y jurisprudencia colombiana, se ha establecido diversos grados de intimidad: la personal, familiar y social.</p> <p>Responde a la investigación <i>la intimidad personal</i>, que hace referencia a “las relaciones familiares, costumbres, prácticas sexuales, salud, comunicaciones personales, creencias religiosas, secretos profesionales y todo comportamiento del individuo que únicamente compete a él está él está sujeto al más alto grado de protección...” (Corte Constitucional sentencia C - 640, 2010).</p> <p>Como se pudo observar en la sentencia en estudio, existió una clara omisión por parte del Juzgado 4° de Familia de la violación constante y sistemática por parte del esposo a la intimidad de la demanda.</p> <p>Adicional, existió por parte del Juzgado 4° de Familia, una clara aceptación de la conducta del esposo, como</p>	

			actuaciones normales dentro de la familia, en donde, la demandante no tenía por qué presentar queja alguna.	
Debido proceso	29	... El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y <u>con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio...</u>	<p>DEFENSA: “En la defensa de las “mujeres víctimas de violencia de género, es necesario una mayor y más contundente actividad probatoria pues <u>a las víctimas se les exige un plus extra de veracidad que no se exige a ninguna otra víctima de delitos o faltas</u>” (Calderón, 2014, pág. 13).</p> <p>Queda claro que, frente al caso en estudio, no fueron suficientes las pruebas presentadas por la demandante para lograr el divorcio de su esposo. Lo anterior, obedece a la discriminación que la mujer continúa teniendo y que lleva a la vulneración del debido proceso, por lo antes señalado.</p>	
Derechos sociales, económicos y culturales		CONCEPTO	TÓPICO	
Derecho	Art. Const.			
Familia	42	... La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla... <u>Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia</u>	DISCRIMINACIÓN	

		<u>en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley</u>		
Igualdad entre hombres y mujeres	43	<u>La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.</u>		
Derechos de los niños	44	<u>... Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física...</u>		

Tabla 1. Derechos vulnerados por el Juzgado 4° de Familia

Fuente: elaboración propia con apoyo de la jurisprudencia T – 967 de 2014.

De esta forma, el *defecto fáctico* hace referencia a dos dimensiones:

(...) una dimensión negativa y una positiva. La primera tiene lugar cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, o simplemente omite su valoración, y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Y la dimensión positiva, se presenta generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes para la definición del caso, que

no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C. P.) o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista material probatorio que respalde su decisión (...) (Corte Constitucional Sentencia T - 781, 2011).

La accionante evidenció para la acción de tutela el defecto fáctico en el que incurrió el Juzgado 4° de Familia por “error probatorio” en su dimensión negativa, debido a que el juzgador hizo caso omiso de las pruebas presentadas, *subvalorándolas de forma caprichosa y sin razón valedera las dio por no probadas*.

De ahí que la decisión del juez se configuró en una *violación directa de la Constitución*, que permitió acudir a la acción de tutela, situación que involucró la superación del “concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de pronunciamientos ilegítimos que afectan derechos fundamentales” (Corte Constitucional sentencia SU 448, 2016).

En términos generales, y a simple modo se establece que la “vía de hecho consiste básicamente en una actuación realizada por un funcionario judicial materializada en una providencia, que además de vulnerar uno o más derechos fundamentales, impone la necesidad de ser descalificada como acto jurídico mediante el amparo de tutela” (Quinche, 2007, pág. 26).

Entonces, la tutela como vía de hecho se ejerció como una forma pronta y oportuna de equilibrar el acto irregular cometido con el fallo ofrecido por el Juzgado 4° de Familia. Vale la pena recordar que “la base normativa de tal solución judicial está constituida por el artículo 86 de la Constitución, que establece una acción constitucional rápida, eficaz y de carácter garantista, que procede en contra de los actos de cualquier autoridad” (Quinche, 2007, pág. 26), incluyendo los jueces como el caso en estudio.

4.1. Primera y segunda instancia

El fallo que negó el divorcio origino que la afectada acudiera a la acción de tutela, negada en primera y segunda instancia por formalismos procesales.

Como se puede observar en la figura 2 se muestra el desarrollo jurídico que se dio, a partir del fallo del Juzgado 4° de Familia el cual fue respaldo en primera y segunda instancia, llevando a sede de revisión las pruebas.



Figura 2. Primera y segunda instancia

Fuente: elaboración propia con apoyo de la jurisprudencia T – 967 de 2014.

Lo anteriores planteamientos sirvieron de base para que la Sala de Revisión estableciera:

- En primer lugar, determinar si la presente acción de tutela contra providencias judiciales resulta procedente. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales ya ha sido abordada, sin embargo, en la tabla 2 se ilustran aspectos que de pronto no se hayan tenido en cuenta.

CAUSALES ESPECIALES DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES	
Defecto orgánico	Ocurre cuando el funcionario judicial que profirió la sentencia impugnada carece, en forma absoluta, de competencia
Defecto procedimental absoluto	Surge cuando el juez actuó totalmente al margen del procedimiento previsto por la ley.
Defecto material o sustantivo	Tiene lugar inconstitucionales, o cuando existe una contradicción evidente y grosera entre los fundamentos y la decisión.
El error inducido	Acontece cuando la autoridad judicial fue objeto de engaños por parte de terceros, que la condujeron a adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales
Decisión sin motivación	Se presenta cuando la sentencia atacada carece de legitimación, debido a que el servidor judicial incumplió su obligación de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que lo soportan
Desconocimiento del precedente	Se configura cuando por vía judicial fijado un alcance sobre determinado tema, y el funcionario judicial desconoce la regla jurisprudencial establecida
Violación directa de la Constitución	Se deriva del principio de supremacía de la Constitución, el cual reconoce a la Carta Política como documento plenamente vinculante y con fuerza normativa

Tabla 2. Providencia excepcional de la acción de tutela

Fuente: elaboración propia con apoyo de la jurisprudencia T – 967 de 2014.

Como se estableció en párrafos anteriores, en el presente caso influyeron el *defecto fáctico* y la *violación de la Constitución*.

- Segundo lugar, establecer si los derechos al debido proceso, a la igualdad, a la intimidad, a la libertad de movimiento y a la protección de la familia invocada por el accionante enunciado en la tabla 1 fueron vulnerados por el Juzgado 4° de Familia de Bogotá, al no valorar integralmente las pruebas presentadas en el proceso de divorcio como se ha ido demostrando en el estudio de caso.

(...) violencia contra la mujer impide el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. La violencia contra la mujer viola y menoscaba o impide su disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La inveterada incapacidad de proteger y promover esos derechos y libertades en los casos de violencia contra la mujer es un problema que incumbe a todos los Estados y exige que se adopten medidas al respecto (...) (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1995, pág. 51).

Por ello, desde diversas disciplinas se han realizado los esfuerzos para promover una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, que lleve a la reducción de los actos violentos a que diariamente son sometidas muchas mujeres en el mundo. Sin embargo, aún continúa existiendo una clara violación de los derechos a la protección de la mujer, en términos de impunidad, que no sólo intensifica la subordinación y la “impotencia de quienes sufren la violencia, sino que además envía a la sociedad el mensaje de que la violencia masculina contra la mujer es a la vez aceptable e inevitable. Como resultado de ello, las pautas de comportamiento violento resultan normalizadas” (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2006, pág. 30) (Véase figura 3).

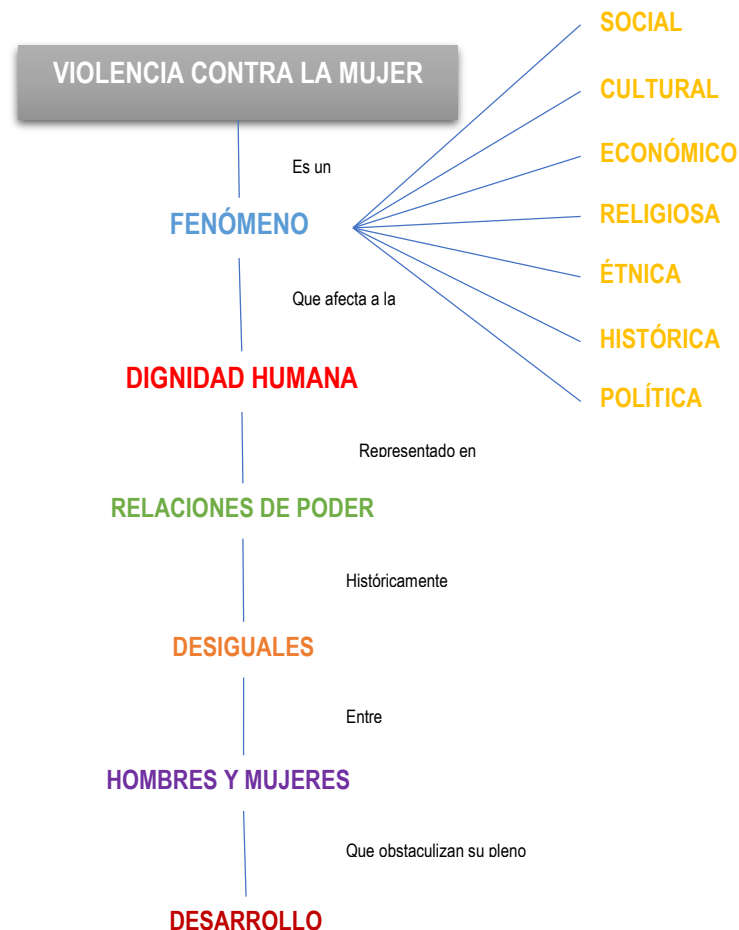


Figura 3. Esquema gráfico de la violencia contra la mujer

Fuente: elaboración propia con apoyo de la jurisprudencia T – 967 de 2014.

De esta forma, cuando se hace referencia al alcance de protección desde diversas disciplinas, en Derecho, la base piramidal de esta es el marco jurídico internacional y nacional.

Frente al amplio marco normativo existente en pro de la defensa de la *no violencia contra la mujer*, nace un gran interrogante *¿por qué aún continúa existiendo este tipo de violencia, contra la mujer? ¿Por qué el sistema normativo no es aplicable?* Contexto que permite evidenciar que aún se está en presencia de la *revictimización de la mujer*, en cuyo caso, los “jueces y las juezas deben tomar todas las medidas efectivas y reales para evitar que las víctimas directas e indirectas padezcan actos revictimizantes, so pretexto de procedimientos legales” (XVII Cumbre Judicial Iberoamericana , 2014, pág. 53) como el caso en estudio; en donde, el Juzgado 4° de Familia hizo caso omiso de las pruebas presentadas por la demandante y adicional frente al fallo, por tecnicismos no aprobaron la acción de tutela, sino hasta que se agotaron todas las instancias que probaron su procedencia.

Ahora bien, en el supuesto que la demandante no hubiera tenido el conocimiento, la prontitud, o el firme deseo de acabar con el maltrato físico y psicológico de su esposo, este hubiera continuado su proceso “normal” según lo estipulado por el Juzgado 4° de Familia, el cual responde a la habitual convivencia y habría llevado a la *revictimización e invisibilización* de un problema que a futuro hubiera podido llegar a situaciones extremas. Eventos que ponen de manifiesto la mirada lánguida de quienes no comprenden la gravedad de las situaciones vividas por la demandante y que gracias a las apreciaciones de los expertos se logró resolver a favor, de lo contrario haría parte de la lista de las *no escuchadas*.

• Tercera. La violencia doméstica o intrafamiliar y psicológica, tema que constituye el eje del análisis que fue ampliamente abordado en páginas anteriores. A éste se suma que:

(...) desde antaño se ha reconocido que este fenómeno ha sido invisibilizado en nuestra sociedad, a partir de la histórica diferenciación entre los conceptos de *lo privado y lo público*, que por décadas ha marcado una pauta de acción estatal nula o de indiferencia, cuando se alegaban conflictos al interior del ámbito íntimo de la familia (...) (Corte Constitucional sentencia T - 967, 2014).

Se evidencia que, a pesar de los esfuerzos, todavía persisten obstáculos para la que la violencia íntima o doméstica pueda ser considerada “como un acto real de violencia. Tales obstáculos son, entre otros, la dicotomía entre las esferas público – privadas y la incapacidad cultural para ver el maltrato íntimo como violencia, debido a su normalización en las culturas patriarcales o su invisibilización” (Corte Constitucional sentencia T - 967, 2014).

En este orden de ideas, las “mujeres víctimas tienen fuertes necesidades de atención en salud mental y física debido a las presiones y cargas psicológicas derivadas de la violencia doméstica, aunadas a la ruptura de los imaginarios sociales” (Corte Constitucional sentencia C - 776, 2010) que conllevan una serie de cargas preestablecidas de épocas pretéritas; en donde, “la mujer era vista como un objeto al servicio del hombre que resulta ser un mecanismo social que emerge desde, y se sustenta en pautas culturales profundamente arraigadas y asumidas por los que la ejercen, la sufren o la presencian; por ello es también violencia simbólica” (Figueroa, 2010, pág. 7); y es quizás desde la “violencia simbólica” que se dio el fallo del Juzgado 4° de Familia, que continua “asumiendo como normal y natural la coerción, y tramando constantemente formas de resistencia, de violencia pasiva, de alianzas que aprueban el maltrato doméstico del hombre “ (Figueroa, 2010, pág. 8); es bajo esta figura y no otra que se entiende el fallo del Juzgado, cuando habiendo existido todo un acervo probatorio que demostraba la violencia doméstica, lo dio por no válido.

- Cuarta y última. La administración de justicia en perspectiva de género. Desde esta óptica se analiza que el Estado tiene la obligación ineludible en torno a la eliminación de cualquier clase de discriminación o violencia ejercida contra una persona por razón de su sexo. Por ello, prevenir y proteger a las mujeres de cualquier tipo de discriminación y violencia, resulta ser una de las tareas que el Estado se encuentra tarde en cumplir.

(...) Es esta última obligación, en esencia, dentro del ordenamiento, la que está en cabeza de la Rama Judicial del Poder Público; por lo que, son los operadores judiciales del país quienes deben velar por su cumplimiento. Sin embargo, como quedó evidenciado, una de las mayores limitaciones que las mujeres encuentran para denunciar la violencia, *en especial la doméstica y la psicológica*, es la tolerancia social a estos fenómenos, que implica a su vez la ineficacia de estos procesos y las dificultades probatorias a las que se enfrenta la administración de justicia frente a estos casos (...) (Corte Constitucional sentencia T - 967, 2014).

Estas razones corroboran los altos niveles de impunidad y el sostenimiento de conductas discriminatorias contra las mujeres, incluso provenientes de los mismos operadores de justicia. En cuyo caso, “la justicia penal ha introducido, al menos a nivel normativo, la perspectiva de género, en especial, en materia de violencia sexual, violencia física y violencia contra las mujeres al interior del conflicto armado” (Corte Constitucional sentencia T - 967, 2014).

En cuyo contexto, son claros los parámetros y estándares que deben seguir fiscales, jueces y cualquier otro funcionario del sistema judicial cuando se enfrenta a la solución de un caso que involucra violencia física y sexual contra la mujer. “*En especial para la consecución, custodia y valoración de las pruebas, pues estos eventos deben estar regidos por los principios de igualdad y respeto, entre otros*” (Corte Constitucional sentencia T - 967, 2014).

La reflexión evidencia que, hasta ahora sólo los casos de mayor *gravedad* han tenido respuestas estatales que incluyen una perspectiva de género en la administración de justicia. “Por regla general, la perspectiva de género en la administración de justicia, sólo se aplica en los procesos judiciales, con sus limitaciones propias, cuando está en riesgo grave la integridad física y/o a vida de las mujeres; es decir en materia penal” (Corte Constitucional sentencia T - 967, 2014). Aspecto que en el caso en estudio no fue tenido en cuenta.

Señalando, además la jurisprudencia en análisis que, en aras de una igualdad procesal realmente efectiva, es claro que *“en ningún caso los derechos del agresor pueden ser valorados judicialmente por encima de los derechos humanos de la mujer a su integridad física y mental y a vivir libre de cualquier tipo de violencia”* (Corte Constitucional sentencia T - 967, 2014).

En este orden de ideas, se llega a un aspecto tangencial, que hizo parte fundamental del desarrollo de la investigación la *ponderación* judicial, que para el caso se inclinó a favor del agresor, bajo la premisa de falta de pruebas, sobre la base de la dicotomía público – privado que la favorece. Por ende, es necesario verificar si el operador judicial actúa o no desde formas estereotipadas de ver a la familia y a la mujer, que contribuyen a normalizar e invisibilizar la violencia. “Formas que, sin duda, parte del supuesto de la no intervención estatal en el ámbito de la intimidad” (Corte Constitucional sentencia T - 967, 2014). Al respecto se puede consultar:

(...) No se puede entonces invocar la intimidad y la inviolabilidad de los hogares para justificar agresiones contra las mujeres en las relaciones privadas y domésticas. Es más, esta violencia puede ser incluso más grave que la que se ejerce abiertamente, pues su ocurrencia en estos ámbitos íntimos la convierte en un fenómeno silencioso, tolerado, e incluso, a veces, tácitamente legitimado. Hace tan solo 30 años, en 1954, en un país de alta cultura democrática como Inglaterra, el comandante de Scotland Yard se jactaba de que en Londres había pocos asesinatos y que muchos de ellos no eran graves pues eran simplemente ‘casos de maridos que matan a sus mujeres.

Esto explica que esta violencia doméstica contra la mujer sea un fenómeno poco conocido y denunciado ante las autoridades pero que, todo indica, adquiere proporciones alarmantes. Así, según ciertas investigaciones, en Estados Unidos sólo se denuncia uno de cada cien casos de violencia en el hogar. Y en Colombia, según lo señalan los propios debates parlamentarios en la discusión del presente tratado [Convención Interamericana de Belém Do Pará], las múltiples formas de violencia contra la mujer comienzan apenas a ser documentadas, con enormes dificultades relacionadas con la naturaleza misma del fenómeno, el cual es visto como ‘natural’ dentro de una cultura discriminatoria, que no es exclusiva de nuestro país, considerado como asunto privado de la mujer o de la familia y no denunciado, ya que la mujer agredida

no goza de presunciones que la favorezcan ni de facilidades procesales para acreditar el delito (...) (Corte Constitucional sentencia C - 408, 1996)

Resulta evidente del caso en estudio que no se puede ponderar sin la respectiva interpretación, debido a que en la formulación de los derechos fundamentales y los principios constitucionales aparecen expresiones de significado abierto o impreciso; razón por la cual, su utilización requiere, necesariamente una labor interpretativa y más aún si se acepta una ponderación como la propuesta por Alexy (2009), en la que no cabe duda que expresiones como peso abstracto o afectación grave, requieren ser interpretadas.

Desde luego, la ponderación es un esquema que envuelve diferentes momentos interpretativos, de la misma forma que la argumentación constitucional; por ello, la colisión entre el derecho a la intimidad y el principio a la verdad fueron muy bien aprovechados por el operador judicial para entablar una respuesta coherente en pro de su protección, bajo el entendido de los defectos fácticos.

De ahí que, haciendo referencia al principio a la verdad se observa que éste tiene por “objeto interpretar, fundamentar e integrar la juridicidad vigente, con el objeto de resolver las cuestiones dentro del contexto jurídico” (Ivanega, 2012, pág. 197). Significa que este principio posee un carácter relevante, debido a que hace parte del vértice de una pirámide, en donde, la verdad material de la realidad y las circunstancias que enmarcan un hecho, como el que se está desarrollando en el presente artículo, con relación a la violencia doméstica que deja claro, que la “verdad” encontró la forma para visibilizarse frente a la violencia de género.

Queda claro, entonces que en materia civil y de familia, la perspectiva de género también debe orientar las actuaciones de los operadores de justicia, en conjunto con los principios constitucionales y la especial protección otorgada a la mujer, cuando es víctima de cualquier tipo de violencia. Aspecto que con todo lo expuesto no fue tenido en cuenta, siendo la tutela en estudio la que dio la respuesta en derecho a la solicitud hecha por la accionante, dejando sin efecto, la decisión del Juzgado 4° de Familia.

4.2. Estructura de la ponderación

Con base en el análisis realizado, se han logrado identificar los principios en colisión que permiten evidenciar los tres elementos que forman la estructura de la ponderación, que son *la ley de la ponderación, la fórmula del peso y las cargas de la argumentación*:

1. *La ley de la ponderación*: Esta hace referencia “al grado de insatisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro” (Bernal, 1989, pág. 8). Si se tiene en cuenta esta ley, la ponderación a su vez se divide en tres pasos:

- El primero hace referencia al *grado de no satisfacción o afectación de uno de los principios*, para el caso el derecho a la igualdad – artículo 13 CN –, intimidad – artículo 15 CN – y debido proceso – artículo 29 de la CN –.
- En segundo lugar, se define la importancia de la satisfacción del principio que juega en sentido contrario, tal como la igualdad – art. 13 –, dignidad humana – artículo 1 CN – y el principio a la verdad, que como lo expresa la Corte “...la instancia ha logrado constatar un verdadero patrón general de tolerancia del Estado y de ineficiencia judicial ante casos de violencia doméstica...”
- En tercer lugar, se define sí la importancia de la satisfacción del principio contrario justifica la afectación o la no satisfacción del otro. Para el caso en concreto como se ha demostrado en el análisis la violación al principio de *la verdad*, permitió que la persona afectada instaurara la acción de tutela; toda vez, que la decisión del Juzgado 4° de Familia en el caso de violencia doméstica afectó, a partir de este principio otra serie de derechos, dejando claro que aún en el país no existe la igualdad entre hombres y mujeres – artículo 43 CN –; aunado a la violación del principio a la verdad, se encuentra que, “amparado en el formalismo probatorio, muestran que el derecho civil y de familia dan un trascendental lugar a la verdad procesal, por encima, de realidades fácticas estructuralmente desiguales” (Corte Constitucional sentencia T - 967, 2014).

De esta forma, a partir de la ley de la ponderación, se debe hacer claridad que el primer y segundo paso son equivalentes. En ambos casos, la operación consiste en establecer un grado de afectación o no satisfacción del – primer principio – que sería *el derecho a la intimidad* y de importancia en la satisfacción del – segundo principio – que sería *el principio a la verdad*. Esta equivalencia ha sido llamada como *la determinación del grado de afectación de los principios en el caso concreto*.

Alexy (2003) sustenta que el grado de “afectación de los principios puede determinarse mediante el uso de una escala triádica o de tres intensidades. En esta escala, el grado de afectación de los principios puede determinarse mediante el uso de la escala triádica o tres intensidades” (pág. 77). En esta escala, el grado de afectación de un principio en un caso concreto puede ser “leve”, “medio” o “intenso. Medida que se plantea del lado de las razones que juegan en contra del derecho fundamental” (Alexy, 2008, pág. 17).

La razón que fundamenta el derecho a la intimidad entre hombres y mujeres – artículo 15 CN –, es la protección a la vida privada, honra y reputación. De ello, se desprende que el peso de las razones que justifican la intervención es alto. Dichas razones pesan fuertemente. “Fijados así la intensidad de la intervención como leve y el grado de importancia de la razón que justifica la intervención como grave, es fácil derivar el resultado” (Alexy, 2008, pág. 17).

La razón para la intervención, que tiene un peso intenso justifica la intervención leve. Como consecuencia, la protección a la intimidad no lesiona la administración de justicia – artículo 229 CN –, pero si evidencia el defecto fáctico y la violación de la Constitución.

El resultado al que se llega en el *examen de proporcionalidad* en sentido estricto es un “evidente” frente al caso en estudio.

Habiendo hecho claridad sobre la *ley de la ponderación* y los elementos que la constituyen, ubicando cada uno de éstos frente al caso en concreto, se hace necesario pasar al paso dos *la fórmula del peso*.

2. *La fórmula del peso*: De acuerdo, con Alexy (2008) la fórmula tiene la siguiente estructura:

$$GPi,jC = \frac{IPiC \cdot GPiA \cdot SPiC}{WPjC \cdot GPjA \cdot SPjC}$$

Esta fórmula expresa que el peso del principio P_i en relación con el principio P_j , en las circunstancias del caso concreto, resulta del coeficiente entre el producto de la afectación del principio P_i en concreto, su peso abstracto y la seguridad de las premisas empíricas relativas a su afectación, por una parte, y el producto de la afectación del principio P_j en concreto, su peso abstracto y la seguridad de las premisas empíricas relativas a su afectación, por otra (Bernal, P, 1989, pág. 12).

De esta forma Alexy (2008) indica que las variables referidas a la afectación de los principios y al peso abstracto, se les puede atribuir un valor número, de acuerdo con los tres grados de la escala tríadica, de la siguiente manera:

- Leve 2^0 , o sea 1
- Medio 2^1 , o sea 2
- Intenso 2^2 o sea 4

En cambio, a las variables relativas a la seguridad de las premisas fácticas se les puede atribuir un valor de:

- Seguro 2^0 o sea 1
- Plausible 2^{-1} o sea $\frac{1}{2}$
- No evidentemente falso 2^{-2} o sea $\frac{1}{4}$.

Desarrollando la fórmula para el caso en estudio se tiene:

El peso del derecho a la *intimidad* frente al principio a la *verdad* podría establecerse de la siguiente manera: El derecho a la intimidad se cataloga bajo el presupuesto de una afectación intensa ($IPiC=4$), al igual que su peso abstracto se trata de la verdad ($GPiA=4$) y la certeza de las premisas – existió el defecto fáctico y la violación a la constitución – ($SPiC=1$).

Paralelamente, la protección a la igualdad y el derecho a la dignidad humana puede catalogarse como media ($WPjC = 2$), su peso abstracto como medio – son derechos fundamentales inherentes al ser humano – ($GPjA = 2$) y la seguridad de las premisas sobre su afectación como intensa – pues el no haber valorado las pruebas en la forma correcta, supone una discriminación frente a la violencia doméstica que sufren las mujeres – ($SPjC = 1$).

En el caso en estudio la aplicación de la fórmula del peso a la intimidad y la verdad arrojaría los siguientes resultados:

$$GPi,jC = \frac{4 \cdot 4 \cdot 1}{2 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{16}{4} = 4$$

De forma correlativa, la protección a la igualdad y el derecho a la dignidad humana de las mujeres que sufren violencia doméstica sería la siguiente:

$$GPj,iC = \frac{2 \cdot 2 \cdot 1}{4 \cdot 4 \cdot 1} = \frac{4}{16} = 0,25$$

Así, se puede establecer que la satisfacción de la igualdad y la dignidad humana de las mujeres víctimas de violencia doméstica – satisfechos sólo en 0,25 – no justifica la no intervención en los derechos a la *intimidad y la verdad* tal como se puede observar en la sentencia T – 967 de 2014 – afectados en 4 –. Estos últimos derechos tendrían que anteceder en la ponderación y, como resultado del caso, debería establecerse que estos son fundamentales para la accionante en la reivindicación de sus derechos.

3. *Las cargas de argumentación*: Es el tercer elemento de la estructura de la ponderación, esta se da cuando existe un empate entre los valores que resultan de la aplicación de la fórmula del peso.

4.2.1. El problema de la colisión de derechos de cara a la estructura de la ponderación

Como se pudo establecer en el desarrollo del caso, la colisión de los derechos fundamentales y principios se configuran como casos difíciles que en palabras de Dworkin (1999) son llamados así cuando los “jueces, abogados y juristas en general están en desacuerdo sobre los derechos de las partes, bien por la existencia de normas contradictorias, bien por la inexistencia de normas aplicables” (pág. 77).

De ahí que, la apreciación que los jueces en sus decisiones hacen juicios de valor y no meras deducciones lógicas, conduce al problema de la objetividad de las decisiones judiciales. “Bajo un entendimiento estrictamente positivista, la discrecionalidad del juez se controla mediante la interpretación exegética y el sometimiento del juez al imperio de la ley” (Arango, 2004, pág. 268). Desde esta perspectiva el ejercicio de la autonomía judicial “no sería controlable mediante parámetros diferentes al propio marco de la ley.

No obstante, una comprensión más compleja del proceso de interpretación y aplicación del derecho distingue entre la justificación interna y la externa de la decisión judicial” (Alexy, 2015, pág. 399).

Significa entonces, que la justificación interna de una decisión judicial se sustenta sobre la corrección lógica del silogismo judicial, en el cual se deben tener en cuenta, “las reglas de inferencia, sustitución y pruebas propias de los juicios deductivos, sin que se presenten contradicciones, vacíos, incoherencias, imprecisiones terminológicas, entre otros” (Arango, 2004, pág. 269). La búsqueda de los argumentos que permitan justificar la escogencia de la premisa normativa se realiza por medio de diversos métodos de interpretación normativa.

Según Guastini (1997) en principio, “los problemas de interpretación en derecho se producen por defectos “intrínsecos” del lenguaje en el que son formuladas las fuentes del derecho y por la superposición en el lenguaje jurídico de las construcciones dogmáticas de los intérpretes” (pág. 98). En este orden, cabría distinguir entre interpretación y aplicación. Esta última solo puede predicarse de las autoridades investidas con este propósito como el poder jurisdiccional y la administración pública. Así “mientras la interpretación concierne a los textos normativos, la aplicación se ocupa de normas, esto es, de formulaciones lingüísticas ya interpretada de tal forma que la interpretación precede a la aplicación” (Blanco, 2016, pág. 102). No obstante, la aplicación suele involucrar la interpretación de los textos, la calificación de un supuesto de hecho y la decisión de una controversia particular.

Ahora bien, en cuanto a los principios constitucionales también pueden ser de tipo directrices, en cuyo caso operan como mandatos de optimización, ejemplo, los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales deben ser realizados o concretados en la mayor medida posible teniendo en cuenta las posibilidades fácticas y jurídicas existentes. La nota particular es que la estructura normativa de las “directrices presenta una configuración abierta tanto de la condición de aplicación como de la consecuencia jurídica, no existiendo por tanto ninguna orientación para decidir por debajo de qué umbral de satisfacción hemos de considerar vulnerados dichos mandatos constitucionales” (Baquerizo, 2009, pág. 28).

Situación que lleva a establecer que la ocurrencia antinómica de principios constitucionales no encuentra respuestas para su solución en los criterios clásicos de la argumentación, pues el resultado que se busca no admite la elaboración de una regla de excepcionalidad constante ni mucho menos de una declaración de invalidez de uno de los principios en conflicto. Los aspectos teóricos planteados, en la jurisprudencia en análisis se ven reflejados en el derecho fundamental de la autonomía y el principio a la verdad, sin dejar de lado el derecho fundamental a la igualdad y la dignidad humana como se demostró en el apartado metodológico, mediante el cual se desarrolló la estructura de la ponderación, por medio de los tres elementos que la conforman: *La ley de la ponderación, la fórmula del peso y las cargas de la argumentación.*

Lo anterior, teniendo en cuenta que “la palabra ponderación deriva de la locución latina *pondus* que significa peso. Esta referencia etimológica es significativa, porque cuando el juez o el fiscal pondera, su función consiste en pesar o sopesar los principios que concurren al caso concreto” (Bernal, 2005, pág. 19). Muestra de ello, fue lo que se dio en la acción de tutela, donde el análisis se desarrolló en torno a la ponderación, dándole el peso adecuado a un derecho fundamental como la *intimidad* y a un principio como la *verdad*, los cuales fueron claramente abordados e interpretados para deducir los yerros normativos e interpretativos en que incurrieron los jueces en las diferentes instancias con relación al tema objeto de estudio.

Lo señalado se fundamenta, en el hecho que “la ponderación es entonces la actividad consistente en sopesar dos principios que entran en colisión en un caso concreto para determinar cuál de ellos tiene un peso mayor en las circunstancias específicas” (Figuerola, 2010, pág. 1). Siendo uno, de estos el derecho a la intimidad.

En este sentido, la Corte ha establecido que el derecho fundamental a la intimidad “puede ser objeto de limitaciones restrictivas de su ejercicio en guarda de un verdadero interés general que responda a los presupuestos *establecidos por el artículo 1º de la Constitución* sin que por ello se entienda que pueda desconocerse su núcleo esencial” (Corte Constitucional Sentencia C-336, 2007).

El reconocimiento de que el derecho a la intimidad puede verse sometido a restricciones significa, sin más, que cierta información del individuo interesa jurídicamente a la comunidad. Hay que admitir que el derecho a la intimidad no es absoluto, implica asentar que, en ciertas ocasiones, cuando el interés general se ve comprometido y se perjudica la convivencia pacífica o se amenaza el orden justo, cierta información individual puede y debe ser divulgada. No por otra razón la Corte ha dicho que, en el desarrollo de la vida corriente, las personas se ven impelidas a sacrificar parte de su intimidad como consecuencia de las “relaciones interpersonales que las involucran. En otros casos, son razones de orden social o de interés general o, incluso, de concurrencia con otros derechos como el de la libertad de información o expresión, las que imponen sacrificios a la intimidad personal” (Corte Constitucional Sentencia C-692, 2003).

“La ponderación es la manera de aplicar los principios y de resolver las colisiones que puedan presentarse entre ellos y los principios o razones que jueguen en sentido contrario” (Bernal, 2005, pág. 19). La práctica se presenta entre ellos permanentes colisiones, dada la pretensión expansiva que les subyace. Así, *prima facie* derechos al todo, sólo pueden ser limitados mediante razones constitucionales de peso, de forma que al final de una ponderación se determine el derecho definitivo. Por ejemplo, el derecho a la intimidad y el principio a la verdad están dotados de una propiedad que las reglas no conocen: el peso. Los principios tienen un peso en cada caso concreto y ponderar consiste en determinar cuál es el peso específico de los principios que entran en colisión. Por ejemplo, cuando la Corte Constitucional aplica los principios constitucionales de protección de la intimidad y el principio a la verdad, los pondera para establecer cuál pesa más en el caso concreto” (Bernal, 2005, pág. 19).

“Conforme a la teoría comprensiva u holística, las normas *iusfundamentales* no se agotan en proteger frente al Estado determinadas posiciones del ciudadano descritas en abstracto; esta perpetua función de los derechos fundamentales se inserta en un marco más vasto” (Alexy, 2009, pág. 4). El principio que tenga un peso mayor será aquel que triunfe en la ponderación y aquel que determine la solución para el caso concreto. En un caso en el que se trate de la divulgación de una información de interés público, muy probablemente se concluirá que el principio a la verdad y el derecho a la intimidad, pesan más que el derecho a la igualdad y la dignidad humana.

En este orden de ideas la Corte en la jurisprudencia en estudio T – 967 de 2014, fija dos criterios claros en relación con:

(i) la valoración de los derechos del agresor en un proceso de violencia intrafamiliar y con (ii) la igualdad de armas. En primer lugar, “en ningún caso los derechos del agresor pueden ser valorados judicialmente por encima de los derechos humanos de la mujer a su integridad física y mental y a vivir libre de cualquier tipo de violencia. Si la ponderación judicial se inclina en favor del agresor, bajo la perspectiva de falta de pruebas, sobre la base de la dicotomía público-privado que lo favorece, es necesario verificar si el operador judicial actúa o no desde formas estereotipadas de ver a la familia y a la mujer, que contribuyen a normalizar e invisibilizar la violencia”.

Lo anterior con el objetivo de garantizar que la igualdad procesal sea realmente efectiva. En este ámbito, son claros los parámetros y estándares que deben seguir fiscales, jueces y cualquier otro funcionario del sistema judicial cuando se enfrenta a “la solución de un caso que involucra violencia física y sexual contra la mujer. En especial para la consecución, custodia y valoración de las pruebas, pues estos eventos deben estar regidos por los principios de igualdad y respeto, entre otros” (Corte Constitucional Sentencia T - 145, 2017).

Se tiene que, las perspectivas de género suponen que las autoridades en el marco de sus competencias y al interior de los procesos que adelanten desplieguen una actividad oficiosa amplia cuando quiera que las pruebas existentes no sean suficientes para determinar o conocer los hechos discriminatorios o de violencia alegados y por razón de ello la ponderación judicial se incline, en principio, en favor del agresor. “Esto supone decretar las pruebas que resulten necesarias para determinar con base en la sana crítica si deben protegerse por encima de los derechos del agresor los de la mujer” (Corte Constitucional Sentencia T - 145, 2017). En todo caso, para arribar a esta conclusión deben siempre analizarse con fundamento en los hechos y de acuerdo con los imperativos del orden jurídico, las actuaciones de quien presuntamente comete la violencia como manifestación del respeto al debido proceso y evitar que el ejercicio hermenéutico se agote desde formas estereotipadas de ver a la familia y a la mujer, que contribuyan a la pérdida de imparcialidad de los operadores jurídicos. Así, “la protección de principios y valores constitucionales implica un ejercicio de ponderación entre el

contenido mismo de la acción de tutela y el papel de la actividad judicial en nuestro ordenamiento jurídico” (Corte Constitucional Sentencia T - 012, 2016).

Del análisis previsto, se concluye que cuando existe la tensión entre derechos generalmente es por casos difíciles, cuya respuesta supone una alta dosis de discreción judicial. En este sentido, la técnica ponderativa exige un significativo esfuerzo de racionalidad de las operaciones de interpretación constitucional, y ello con independencia de que se considere que es capaz de conducir a la anhelada unidad de solución correcta.

5. Conclusiones

La revisión jurisprudencial, normativa nacional e internacional aunada a los pronunciamientos de la Corte IDH permitió establecer que existe un amplio bagaje en el tema de la discriminación de la mujer, en diferentes contextos; demostrando con ello, la preocupación de los Estados por amparar o reestablecer los derechos de las mujeres; muestra de ello, son los convenios internacionales y las normas nacionales que han ofrecido un avance significativo, unido a la condena que los Estados han tenido frente a esta clase de crímenes como los casos abordados en México y Chile; en cuyo caso, la ponderación de los derechos y principios cumplen un papel fundamental para dirimir los conflictos suscitados entre los operadores jurídicos a la hora de valorar esta clase de delitos.

Así, se encuentra que la problemática radica en la débil capacidad que tiene el Estado colombiano, a la hora de sancionar esta clase de delitos, sanción que podría ser ejemplar si se tiene en cuenta el marco normativo el cual aporta los elementos de forma y de fondo para impartir castigos ejemplares, los cuales siguen siendo muy débiles, en el caso cuando se dan, pero generalmente estos delitos continúan en total impunidad.

Muestra de lo señalado, es el caso que se analizó en el presente artículo, reflejo de la violencia contra la pareja, que se caracteriza por tener una marcada desigualdad entre el agresor y la víctima, amparada, como sucedió en el caso en estudio, por la violencia simbólica que encierra la aceptación de comportamientos agresores como normales dentro del ámbito familiar. Es bajo esta premisa, que el operador judicial encontró la forma de sostener el maltrato padecido por la accionante, bajo artilugios legales, en donde afianzó la postura del agresor al ponderar de forma errónea las pruebas presentadas por la víctima del maltrato doméstico.

Con esta premisa, se encuentra que en Colombia pesó a existir un fuerte marco normativo, una sólida estructura de políticas públicas, un conjunto de entidades que generan la protección de la mujer en forma de movimientos sociales, es claro, que continúa existiendo una arraigada invisibilización de las víctimas de violencia doméstica, cohonestada por algunos operadores judiciales en sus decisiones.

Así, casos como el señalado deja en entredicho los avances realizados en la materia, generando impunidad frente a situaciones como las presentadas. Es por ello, que se debe continuar en el ascenso por lograr que los togados comprendan en todo su contexto lo que significa la violencia de género – violencia doméstica, y las implicaciones que ésta tiene dentro de los parámetros comportamentales de la sociedad.

Se hace necesario consolidar los estudios jurisprudenciales que han promovido la protección a la mujer. Mecanismo idóneo para reconocer un problema que no puede ser visto a la ligera, y que debe proseguir su proceso de robustecimiento en pro de fortalecer los derechos fundamentales y sociales de las mujeres, desde las actuaciones en derecho; en donde, no debe existir posturas ambiguas que terminen en las altas Cortes por una mala interpretación del acervo probatorio o por una mala valoración que lleva a que la ponderación de la prueba se sesgue de forma contradictoria.

De ahí que, con el caso en estudio se abre la posibilidad en el país de impartir la justicia con perspectiva de género y enfoque de Derechos Humanos, que vele por la dignidad de las mujeres víctimas de violencia doméstica; la cual abriría una oportunidad para corregir y generar un verdadero compromiso en los operadores judiciales en la mejora de mecanismos que ofrezcan soluciones reales, a través del análisis de los delitos de esta índole. Para ello, en la formación de los administradores de justicia debería existir aquella orientada sobre como *juzgar con perspectiva de igualdad de género*, en el marco de la formación de esta clase de funcionarios públicos, que afianzaría la estructura que el país ha querido adquirir en materia de Derecho Humanos.

Por su parte, el empleo del juicio de ponderación presupone una visión abierta y pluralista que no conoce de jerarquías o absolutismos en el catálogo de bienes, valores y derechos constitucionales. Sólo de esta forma se puede dimensionar correctamente la finalidad de la técnica ponderativa, que no es la imposición o la sublimación de uno de los principios en concurrencia, sino la armonización de aquellos mediante el menor grado de lesión o afectación posibles. La pluralidad de los principios y la ausencia de una jerarquía formal entre ellos hacen que no pueda existir una ciencia sobre su articulación, sino una prudencia en su ponderación.

Es por ello, que para comprender la colisión de los derechos y su importancia se ha hecho uso de la llamada *estructura de la ponderación*, la cual permite a través de un ejercicio práctico entender el nivel de injerencia de los derechos que están en debate y que generalmente resultan vulnerados. Es así, como esta estructura ofrece tres momentos – la ley de la ponderación, la fórmula del peso y las cargas de la argumentación – que fueron abordados en el ejercicio realizado en el presente artículo, al sopesar los derechos vulnerados como lo son, *derecho a la intimidad, igualdad, debido proceso, libertad de movimiento y la protección a la familia*.

Para tal fin, se desarrolló cada uno de los momentos, haciendo claridad que la fórmula del peso permite generar un valor “abstracto” a los derechos que se consideren más vulnerados, los cuales se pueden escoger de acuerdo con la percepción de quien esté efectuando el análisis y la fundamentación del caso en estudio. Esta es quizás, la

situación más compleja del presente ejercicio, determinándose que el derecho a la intimidad junto con el principio a la verdad, fueron los de mayor peso, frente al derecho a la igualdad y la dignidad humana, que si bien son importantes, no son determinantes en el caso de violencia intrafamiliar, en el sentido, que sí existe el respeto a la intimidad intrínsecamente se está hablando de igualdad y de dignidad y sí se valora correctamente el principio a la verdad, no se generaría la controversia frente a lo planteado en la jurisprudencia con relación al defecto fáctico y violación a la constitución.

Por ello y teniendo en cuenta tanto la relación de proporcionalidad como los límites de los derechos fundamentales, habrá de señalarse que, en un caso como el analizado en el presente artículo, el operador judicial debe restar peso al derecho fundamental de la intimidad y permitir preponderar el principio de verdad, valorando las pruebas, así, éstas se produzcan y provengan de la intimidad de un hogar, porque velar por este principio (verdad), no es que, la autoridad judicial sea arbitraria o desconozca el ejercicio de la ponderación, sino viene a justificar la aplicación del principio de proporcionalidad.

6. Referencias

- Agudelo, G. (2012). Restricción, limitabilidad y Derechos Fundamentales: Aportes para una teoría sistemática de los Derechos Fundamentales como Derechos limitables. En E. C. Blanco, *Crítica y fundamentación de la política y los Derechos Humanos* (págs. 143 - 167). Bogotá, D.C: Universidad Libre.
- Alexy, R. (1997). *Teoría de la argumentación jurídica*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
- Alexy, R. (2003). *Serie de teoría jurídica y filosofía del derecho*. Bogotá, D.C: Universidad Externado de Colombia.
- Alexy, R. (2008). La fórmula del peso. En M. Carbonel, *El principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional* (págs. 13 - 43). Quito - Ecuador: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Alexy, R. (2009). Derechos Fundamentales, Ponderación y Racionalidad. *Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional*(1), 3-14.
- Alexy, R. (2015). *Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica*. Lima: PALESTRA.
- Arango, R. (2004). Colisión y ponderación de principios: su relevancia en el derecho ordinario. En R. Arango, *Derechos, constitucionalismo y democracia* (págs. 219 - 266). Bogotá, D.C: Universidad de los Andes.
- Baquerizo, M. (julio de 2009). *Colisión de derechos fundamentales y juicio de ponderación*. Obtenido de <http://www.revistajuridicaonline.com/2009/07/colisin-de-derechos-fundamentales-y-juicio-de-ponderacin/>
- Bernal, C. (2008). La racionalidad de la ponderación. En M. Carbonel, *El principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional* (págs. 43 - 69). Quito - Ecuador.
- Bernal, P. (1989). *Cuadernos de filosofía del derecho*. Bogotá, D.C: Espagracic.
- Bernal, P. (2005). *La Ponderación como procedimiento para interpretar los derechos fundamentales*. México: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- Blanco, D. (2016). *El viaje de las razones: hacia una pragmática de la ponderación*. Bogotá, D.C.: IBÁÑEZ.
- Calderón, L. (2014). *La intervención letrada en la defensa de las víctimas de violencia de género*. España: Junta de Andalucía.

- Cerda, G. (2011). *Los elementos de la investigación. Cómo reconocerlos, diseñarlos y construirlos*. Bogotá, D.C: Magisterio.
- Corte Constitucional sentencia C - 776. (29 de septiembre de 2010). Magistrado ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. Bogotá, D.C.
- Corte Constitucional sentencia C - 408. (4 de septiembre de 1996). Magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero. Bogotá, D.C.
- Corte Constitucional sentencia C - 640. (18 de agosto de 2010). Magistrado ponente: Mauricio González Cuervo. Bogotá, D.C.
- Corte Constitucional Sentencia C-336. (9 de mayo de 2007). Magistrado Ponente: Jaime Córdova Triviño. Bogotá, D.C.
- Corte Constitucional Sentencia C-692. (12 de agosto de 2003). Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. Bogotá, D.C.
- Corte Constitucional sentencia SU 448. (22 de agosto de 2016). Magistrado ponente: José Ignacio Pretelt Chaljub. Bogotá, D.C.
- Corte Constitucional Sentencia T - 012. (22 de Enero de 2016). Magistrado ponente: Luís Ernesto Vargas Silva. Bogotá, D.C.
- Corte Constitucional Sentencia T - 097. (20 de febrero de 2014). Magistrado ponente: Luís Ernesto Vargas Silva. Bogotá, D.C.
- Corte Constitucional Sentencia T - 145. (7 de marzo de 2017). Magistrado ponente: María Victoria Calle Correa. Bogotá, D.C.
- Corte Constitucional Sentencia T - 160. (21 de marzo de 2013). Magistrado ponente: Luís Guillermo Guerrero Pérez. Bogotá, D.C.
- Corte Constitucional Sentencia T - 781. (20 de Octubre de 2011). Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. Bogotá, D.C.
- Corte Constitucional sentencia T - 967. (15 de diciembre de 2014). Magistrado ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. Bogotá, D.C.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (16 de Noviembre de 2009). Caso González y Otras (Campo algodónero) Vs México. México .
- Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (28 de noviembre de 2012a). Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación In Vitro) Vs. Costa Rica. Costa Rica.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (24 de febrero de 2012b). Caso Atala Riffo y niñas Vs Chile. Chile.
- El Tiempo. (25 de octubre de 2016). *Se conmemora día internacional para eliminar violencia contra la mujer*. Obtenido de <http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/cifras-de-violencia-contra-las-mujeres-en-colombia-33079>
- Figueroa, D. (2010). *La violencia de género como estrategia masculina para afrontar el cambio en las mujeres. El caso de socias y socios de una empresa rural en Oaxaca*. Obtenido de <https://trace.revues.org/1477>
- Figueroa, G. (31 de agosto de 2010). *Ponderación Constitucional*. Obtenido de edwinfigueroaag.wordpress.com: <https://edwinfigueroaag.wordpress.com/2010/08/>
- Giraldo, G. (18 de noviembre de 2012). *Derecho a la intimidad desde la jurisprudencia constitucional*. Obtenido de <http://www.lavozdelderecho.com/index.php/actualidad-2/corrupt-4/item/1930-derecho-a-la-intimidad-desde-la-jurisprudencia-constitucional>

- Gómez, C. (2013). *Historias de violencia, roles, prácticas y discursos legitimadores. Violencia contra las mujeres en Colombia 2000-2010*. Bogotá, D.C.: Ministerio de Salud.
- Guastini, R. (1997). Problemas de interpretación. *En Isonomia*(7), 121-131.
- Guastini, R. (1997). Problemas de interpretación. *En Isonomia*(7), 121-131.
- Guibourg, R. (17 de febrero de 2015). *Alexy y su fórmula del peso*. Obtenido de http://www.aafder.org/wp-content/uploads/2015/02/Guibourg_Alexy.pdf
- Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (1 de octubre de 2017). *Violencia contra las mujeres. Colombia comparativo años 2016 y 2017 (enero - octubre)*. Obtenido de www.medicinalegal.gov.co
- Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2016). *Violencia de género en Colombia análisis comparativo de las cifras de los años 2014, 2015 y 2016*. Bogotá, D.C.: Medicina Legal.
- Ivanega, M. (15 de enero de 2012). *El alcance del principio de verdad material en el procedimiento administrativo*. Obtenido de Biblioteca jurídica virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/opera-prima.../1388>
- Lafaurie, M. (2013). La violencia intrafamiliar contra las mujeres en Bogotá: una mirada de género. *Colombiana de Enfermería*, 8(8), 98-111.
- Ley 1257. (4 de diciembre de 2008). Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. *Diario Oficial N°. 47.193*. Bogotá, D.C.: Congreso de Colombia.
- Mabel, I. (2012). *El alcance del principio de verdad material en el procedimiento administrativo*. Obtenido de <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/opera-prima.../1388>
- Ninco, B. (2007). *Violencia contra la mujer, una mirada diferente*. Bogotá, D.C.: Pontificia Universidad Javeriana.
- Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (10 de diciembre de 1948). *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. Obtenido de <http://www.ohchr.org>.
- Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (1995). *Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer*. Beijing: ONU.
- Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (2006). *Poner fin a la violencia contra la mujer. De las palabras a los hechos*. Chile: ONU.
- Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (21 de junio de 2017). *Los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género*. Obtenido de <http://www.ohchr.org/SP/Issues/Women/WRGS/Pages/WRGSIndex.aspx>
- Pino, G. (2013). *Derechos fundamentales, conflictos y ponderación*. Lima: Palestra Editores.
- Profamilia. (mayo de 2015). *Decir NO, No es suficiente*. Obtenido de <http://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2015/05/Comunicado%20No%20violencia%20contra%20la%20mujer.pdf>

- Quinche, R. (2007). *Vías de hecho acción de tuteela contra providencias*. Bogotá, D.C: Universidad del Rosario.
- Rueda, L. (julio-diciembre de 2011). La violencia psicológica contra las mujeres en Colombia. *De Economía del Rosario*, 14(2), 165-188.
- Sánchez, Z. (2011). La metodología en la investigación jurídica: Características peculiares y pautas generales para investigar en el Derecho. *Revista telemática de Filosofía del Derecho*(14), 317 - 358.
- Semana. (9 de febrero de 2016). *La epidemia de la violencia intrafamiliar: van cerca de 50.000 casos en el 2016*. Obtenido de [www.semana.com](http://www.semana.com/nacion/articulo/violencia-intrafamiliar-en-colombia-2016/492198): <http://www.semana.com/nacion/articulo/violencia-intrafamiliar-en-colombia-2016/492198>
- Stake, R. (1994). Case studies. En N. Denzin, *Handbook of qualitative research* (págs. 236 - 247). London: Sage.
- Vásquez, R. (junio-diciembre de 2008). La violencia intrafamiliar contra la mujer en Colombia: ¿Cuestión de género? *Pensamiento Americano*, 1(1), 31-37.